

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL  
SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE	ORLANDO SALDARRIAGA RESTREPO
DEMANDADO	INDUSTRIAS RAMBLER S.A.S.
RADICADO	05360-31-05-002-2021-00258-01
ORIGEN	JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CTO DE ITAGÜÍ
TEMAS Y SUBTEMAS	TERMINACIÓN POR TRANSACCIÓN

AUTO INTERLOCUTORIO No.016

Medellín, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Corresponde a la Sala a decidir acerca de la petición consignada en memorial presentado por el apoderado judicial de la PARTE DEMANDADA, coadyuvado por la mandataria de la PARTE DEMANDANTE, a través del cual solicitan la terminación por TRANSACCIÓN del proceso promovido por **ORLANDO SALDARRIAGA RESTREPO** contra la sociedad **INDUSTRIAS RAMBLER S.A.S.**, radicado **05360-31-05-002-2021-00258-01**.

ANTECEDENTES

El señor **ORLANDO SALDARRIAGA RESTREPO** presentó demanda ordinaria laboral en contra de la sociedad **INDUSTRIAS RAMBLER S.A.S.** con el fin de que: **1)** Se declare que el despido del que fue objeto se tornó ilegal, por no respetar los procedimientos especiales consagrados en la Ley 361 de 1991, al ser desvinculado sin autorización del Ministerio del Trabajo. **2)** En consecuencia, deprecó que se ordene a la empresa su reintegro al cargo que ostentaba o a uno de igual o superior jerarquía, acorde a sus limitaciones físicas, junto al consecuente pago de los salarios y prestaciones legales y convencionales dejados de percibir, desde el despido hasta que sea reinsertado a sus labores. **3)** También solicitó el pago de la indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, así como el pago de intereses moratorios y la indexación de las sumas resultantes.

La Litis fue desatada en primera instancia en Sentencia No. 166 del 11 de octubre de 2022, a través de la cual el Juzgado de primera instancia decidió:

*“(…) PRIMERO: SE ORDENA a la sociedad INDUSTRIAS RAMBLER S.A.S. a reintegrar al señor ORLANDO SALDARRIAGA RESTREPO al cargo que venía desempeñando u otro de igual categoría y que sea compatible con su*

*discapacidad, con el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, como se explicó en la parte motiva de esta providencia.*

*SEGUNDO: CONDENAR a reconocer y pagar la suma de \$5.266.800, por concepto de la indemnización que contempla el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.*

*TERCERO: Se ORDENA indexar las sumas a reconocer en esta providencia. (...)*

Inconforme con la decisión de primera instancia, la PARTE DEMANDADA interpuso recurso de apelación contra la misma, para que fuera resuelta en esta instancia.

No obstante, a través de memorial arrimado a la Corporación 16 de diciembre de 2022, la apoderada judicial de la DEMANDADA, arrimó solicitud coadyuvada por el apoderado del DEMANDANTE, a través del cual deprecó la terminación del asunto en virtud del acuerdo de transacción alcanzado por las partes (Archivo 02 ED Tribunal).

### CONSIDERACIONES

Para resolver la solicitud es pertinente traer a colación lo dispuesto en el artículo 312 CGP, aplicable a los asuntos laborales por remisión expresa del artículo 145 del CPTSS, el cual estipula que “(...) *En cualquier estado del proceso podrán las partes transigir la Litis (...)*”.

Ahora bien, en el inciso tercero del artículo 312 del CGP se ha instituido que para que la transacción produzca efectos procesales deberá solicitarse por quienes la hayan celebrado, al juez o tribunal que conozca del proceso o de la respectiva actuación posterior, precisando su alcance o acompañando el documento que la contenga. Así mismo, indica que “(...) *el juez aceptará la transacción que se ajuste al derecho sustancial y declarará terminado el proceso, si se celebró por todas las partes y versa sobre la totalidad de las cuestiones debatidas o sobre las condenas impuestas en la sentencia (...)*”.

Sobre el particular se ha dispuesto en materia laboral, que dicha transacción es válida si se trata de derechos inciertos y discutibles (art. 15 CPT y SS).

En relación con dicha figura legal, la Jurisprudencia Especializada, a partir de la providencia AL1761-2020, remembrada en la AL2004-2021, retomó el criterio según el cual es procedente el estudio de la transacción y su consecuente aceptación siempre que se reúnan los requisitos legales previstos para ello. En dicha oportunidad, así lo explicó:

*“(...) Ante una nueva revisión del asunto, la Sala considera oportuno replantear lo que hasta la fecha fue su criterio mayoritario y arribar a un entendimiento distinto de los artículos 15 del Código Sustantivo del Trabajo y 312 del Código General del Proceso, en el sentido de considerar que es procedente la aceptación de la transacción, en aquellos casos en que se reúnan los presupuestos legales previstos para ello.*

*(...)*

*En fundamento de ello, debe anotarse que, si bien la Sala de Casación Laboral como máximo órgano de la jurisdicción ordinaria tiene a su cargo la función de unificación de la jurisprudencia a través del conocimiento de los recursos de revisión y casación, lo cierto es que la transacción no es un mecanismo procesal incompatible o contrapuesto a estas facultades de autoridad de cierre, ni a la etapa extraordinaria de casación del juicio laboral.*

*En esa dirección, si bien la transacción no está regulada de forma expresa en el Código Procesal del Trabajo, lo cierto es que esta, al igual que otras tantas figuras no establecidas en aquel estatuto, es plenamente aplicable a los asuntos laborales en virtud de la remisión a las normas generales del proceso que autoriza el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; y aunque su solicitud de aprobación se dé en el curso del trámite de casación, no significa que sea extemporánea o ajena al juicio laboral, dado que en esta etapa el proceso aún sigue en curso y la decisión de instancia recurrida no ha cobrado firmeza.*

*De ahí que la facultad de las partes para terminar de manera temprana y concertada el litigio a través de esta figura, no se enerva por su falta de previsión en el artículo 14 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social o por su solicitud en sede de casación, pues el artículo 312 del Código General del Proceso señala que se puede presentar en cualquier estado del proceso e incluso respecto de «las diferencias que surjan con ocasión al cumplimiento de la sentencia».*

*Aunado a ello, la Sala estima que darle viabilidad a la aplicación de la transacción permite la materialización de otros principios procesales y constitucionales que también irradian el juicio laboral, como son los de economía procesal, lealtad procesal y buena fe de las partes en controversia; y no compromete el criterio de la Corte para resolver futuras controversias, toda vez que su labor se ciñe a verificar la incertidumbre «real y efectiva» sobre los derechos transados por las partes y luego de ello, a impartir aprobación a lo convenido por estas, sin entrar a estudiar el asunto de fondo pues no le incumbe declarar o desestimar el derecho en discusión a partir de la verificación de lo fallado por el juez de segunda instancia, como sí le correspondería en su labor de tribunal de casación.*

**Por ello, antes que proscribir la procedencia de la figura en sede de casación laboral, es pertinente avalar su aplicación, precedida claro está, de una rigurosa y cuidadosa verificación que será la que garantice la observancia de los principios de irrenunciabilidad e indisponibilidad de los derechos mínimos de los trabajadores, tal y como lo prevé el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 53 de la Carta Política, y en virtud del carácter público de las normas del trabajo y su propósito principal de dar equilibrio social a las relaciones patrono laborales -artículo 1.º del Código Sustantivo del Trabajo-**

Bajo las precedentes consideraciones avala la Corte la aplicabilidad de la figura de la transacción en el contexto de la justicia laboral, precisando unos presupuestos cuyo cumplimiento refiere como indispensables para que proceda su aprobación, a saber: **“(i) que exista entre las partes un derecho litigioso eventual o pendiente de resolver; (ii) que el objeto a negociar no tenga el carácter de un derecho cierto e indiscutible; (iii) que el acto jurídico sea producto de la voluntad libre de las partes, es decir, exenta de cualquier vicio del consentimiento, y (iv) que lo acordado genere concesiones recíprocas y mutuas para las partes (CSJ AL607-2017), o no sea abusiva o lesiva de los derechos del trabajador (...)”** (Subraya y Negrilla de la Sala).

Con los anteriores elementos, pasa la Sala a examinar el acuerdo transaccional al que llegaron las partes para finiquitar la presente Litis, advirtiendo lo siguiente:

Del documento aportado al plenario, visible en el Archivo 03 Tribunal, suscrito por el DEMANDANTE y la representante legal de la sociedad ACCIONADA, se observa que el acuerdo se basó en los siguientes términos:

a) La sociedad INDUSTRIAS RAMBLER S.A.S., identificada con NIT 890.911.837-6, y representada legalmente por la señora LILIANA PATRICIA SOTO ARIAS, identificada con la cédula de ciudadanía # 43.731.425, pagará la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$35.000.000), el día 20 de diciembre de 2022, mediante dos transferencias bancarias, de la siguiente manera, según <sup>2</sup> acuerdo entre el señor Orlando Saldarriaga y su apoderado:

- Al señor ORLANDO SALDARRIAGA RESTREPO, quien se identifica con cédula de ciudadanía #15.457.405, la suma de **VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$24.500.000)**, el día 20 de diciembre de 2022, mediante transferencia bancaria a la cuenta ahorros #00118000071009, de la Cooperativa Creafan Red Coopcentral, cuyo titular es el señor Orlando Saldarriaga Restrepo, de conformidad con la respectiva certificación, allegada por éste a la empresa.
- A la sociedad ASESORÍAS JURÍDICAS LEGALCONT S.A.S., identificada con Nit # 900.948.685, la suma de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$10.500.000)**, el día

**20 de diciembre de 2022, mediante transferencia bancaria a la cuenta ahorros # 611576773-81, de Bancolombia, de conformidad con la respectiva certificación, allegada por a la empresa.**

b) Mediante la suma indicada, y la suma recibida por el trabajador a la fecha de terminación del contrato, correspondiente a indemnización por despido sin justa causa, cesantías e intereses a las cesantías, las partes transan todas y cada una de las obligaciones impuestas a cargo de la empresa, dentro del trámite de primera instancia, del proceso ordinario laboral promovido por el señor Saldarriaga Restrepo, las cuales se relacionan expresamente a continuación:

- Reintegro laboral del señor Orlando Saldarriaga Restrepo, al cargo que venía desempeñando, u otro de igual categoría, con el pago de salarios, prestaciones sociales de cesantías, intereses, vacaciones, primas de servicio y aportes a la seguridad social. Todos ellos, causados dentro del tiempo de vinculación antes expuesto y dentro del lapso transcurrido después del despido y la suscripción de este documento.

Pago de la suma de \$5.266.800, por concepto de indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

- Indexación de las sumas reconocidas.
- Agencias en derecho por la suma de \$3.000.000
- La suma recibida por el Señor Saldarriaga a la terminación del contrato por concepto de vacaciones, cesantías, intereses, primas e indemnización, la retiene el extrabajador y se aplica también al pago de los conceptos prestacionales, indemnizatorios y salariales referidos en esta transacción.

La solicitud en comento se dirigió a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, autoridad que conoce actualmente del asunto por virtud del recurso de apelación interpuesto el apoderado de la demandada en contra de la decisión emitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí, el 11 de octubre de 2022, y que, por lo mismo no ha alcanzado firmeza o efectos de cosa juzgada material.

Bajo ese contexto, el acuerdo transaccional descrito, se constata, no desconoce derechos ciertos del trabajador, ni se imponen obligaciones que se encuentren por fuera del marco de la legalidad, en atención a que, entre las partes existe un derecho litigioso relativo a verificar la procedencia del reintegro del demandante, del cual, aún no hay certeza sobre la configuración de los presupuestos que den paso a la exigibilidad de las consecuencias derivadas de este, tal como lo ha explicado la Sala de Casación Laboral de la CSJ, por ejemplo, en Auto AL1182-2021<sup>1</sup>:

*“(…) En primer lugar, entre las partes existe un derecho litigioso eventual o pendiente de resolver, relativo a determinar si la terminación del vínculo laboral del actor obedeció a una justa causa y las consecuencias económicas que ello acarrearía en caso de probarse dicho supuesto.*

*En segundo lugar, el derecho que es objeto de negociación es incierto y discutible, toda vez que no hay certeza plena sobre la configuración de las condiciones o supuestos fácticos que causan su exigibilidad (CSJ AL, 7 feb. 2009, rad. 32051), y además aún está sub judice o en discusión en sede casacional. (…)*”.

<sup>1</sup> Postura reiterada en Auto AL2551-2021

Además, el mismo Alto Tribunal ha precisado que no corresponde a la Sala decidir la justeza del acuerdo. Así quedó dicho en Auto AL1129-2021:

*“(…) Finalmente, conviene aclarar que en asuntos como el discutido, una vez acreditados los requisitos formales de un acto mutuo como la transacción presentada, la justeza misma del contenido del acto no es un asunto que esté bajo la órbita del juzgador reconocer, comoquiera que son las partes las que autónomamente fijaron los linderos de su controversia y la dieron por superada mediante alguno de aquellos actos jurídicos, con prescindencia de la administración de justicia. Así lo recordó la Sala en providencia CSJ SL1249-2014, reiterada en la Sentencia CSJ SL2404-2020, cuando afirmó: Finalmente, resta advertir que a la Corte no le compete definir si la suma que recibió la actora en la conciliación era una «justa» o «equitativa» contraprestación para transar sus derechos, pues esa es una cuestión que deciden libre y autónomamente las partes en el ejercicio de la conciliación, que, vale recalcarlo, hace tránsito a cosa juzgada y le impide a la justicia ordinaria reexaminar los puntos contemplados y concertados por las partes.(…)”.*

En atención a lo expuesto considera la Sala procedente aceptar el acuerdo transaccional al que llegaron las partes y dar por terminado el proceso. Sin costas en esta instancia de acuerdo con el inciso 4° del artículo 312 CGP.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**,

## RESUELVE

**PRIMERO: ACEPTAR LA TRANSACCIÓN** que sobre la cuestión litigiosa celebraron las partes en este juicio ordinario, en el que fungió como demandante el señor **ORLANDO SALDARRIAGA RESTREPO** y como demandada la sociedad **INDUSTRIAS RAMBLER S.A.S.**

**SEGUNDO: DAR** por terminado el presente proceso.

**TERCERO: Sin COSTAS** en esta instancia.

## NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA

MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –  
SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 034 del 28  
de febrero de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>

